

Área: América Latina - ARI N° 40/2008
Fecha: 09/04/2008



El frágil y pendular entendimiento entre Venezuela y Colombia

María Teresa Romero *

Tema: Bajo los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, entre Venezuela y Colombia se ha reforzado una relación político-diplomática inestable y pendular que no sólo mantiene en jaque la buena marcha de las relaciones bilaterales sino la precaria estabilidad de la región andina.

Resumen: Las relaciones político-diplomáticas entre Venezuela y Colombia bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe (2000-2008) se han desarrollado en forma pendular, oscilando entre períodos de entendimiento pragmático y de fuerte tensión. El último *impasse* diplomático entre los dos gobiernos, a principios de marzo y a consecuencia de un hecho indirecto como la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano, no sólo situó las relaciones bilaterales al borde de la ruptura sino a las dos naciones a las puertas de un conflicto bélico con potencialidades de proyección a toda la región andina y de graves consecuencias hemisféricas. Al final, el *impasse* no llegó a mayores, ya que fue oportunamente desactivado. Y ahora los presidentes Chávez y Uribe se preparan para una Cumbre con el propósito de reafirmar su amistad y compromiso en torno a su compleja e importante agenda binacional común. Sin embargo, como en otras oportunidades, esta paz se muestra superficial y frágil. De allí que sea previsible, a más corto o largo plazo, un nuevo conflicto entre ambos gobiernos que ponga nuevamente en jaque las relaciones colombo-venezolanas y la estabilidad regional.

Análisis: Las relaciones entre Venezuela y Colombia experimentaron un cambio sustancial en los últimos 10 años del siglo XX respecto al pasado. Desde la independencia de ambas naciones en el siglo XIX hasta finales de la década de los ochenta del pasado siglo, los problemas limítrofes produjeron graves conflictos diplomáticos y opacaron el importante comercio bilateral. A partir de 1989 y 1990, con la firma de la Declaración de Ureña y del Acta de San Pedro Alejandrino por los presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Virgilio Barco de Colombia, se empezó a construir una relación especial entre ambos países bajo la tesis de la “desgolfización”, que permitió ir limando las tensiones y asperezas por los problemas fronterizos y limítrofes, y priorizando la integración económica, financiera y cultural. En 1999, la cooperación política-militar y el buen entendimiento colombo-venezolano –si bien no faltaron los roces y divergencias, especialmente en la zona fronteriza, durante la presidencia del venezolano Rafael Caldera– habían alcanzado un nivel sin precedentes. Ello explica que Colombia se haya convertido en el principal cliente comercial de Venezuela (después de EEUU) y que en suelo venezolano se llevaran a cabo importantes negociaciones de paz y canje humanitario entre representantes del Estado y las guerrillas colombianas. Incluso, a solicitud de Colombia, Venezuela –junto a España, Costa Rica y México– formó parte

* Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela

del grupo de países amigos para facilitar la búsqueda de una salida política al conflicto interno colombiano.

No obstante, desde que se inició el gobierno de Hugo Chávez, comprometido con la puesta en práctica de un proyecto nacional, regional e internacional de izquierda radical – el llamado socialismo del siglo XXI– y divergente con la democracia representativa prevaleciente en Colombia, la relación especial entre los dos países entró en un proceso paulatino de deterioro que fue resquebrajando, a la vez, todos los mecanismos binacionales acordados por los gobiernos que se sucedieron entre 1989 y 1999 a objeto de mantener la agenda común en un nivel óptimo y coherente. Esto dio lugar a una serie de conflictos políticos e *impasses* diplomáticos que se han ido profundizando, aunque sin el poder suficiente para producir una ruptura total y definitiva en la relación bilateral en virtud de que, pese a su visible deterioro, se ha mantenido entre las poblaciones y los sectores empresariales de las dos naciones un alto grado de integración, sobre todo en el área económica.

En tiempos de Andrés Pastrana

Entre 1999 y 2002, se conformó la pauta de la relación política oscilante que hoy en día prevalece entre los gobiernos de Venezuela y Colombia. El vínculo entre los presidentes Chávez y Pastrana empezó con buen pie, ya que el primero apoyó y colaboró con el segundo en el proceso negociador con las FARC. Días antes de tomar posesión formal de la presidencia, el 18 de enero de 1999, Chávez estuvo en la reunión que con el fin de apuntalar las conversaciones de paz con la guerrilla colombiana sostuvieron Fidel Castro y Pastrana en La Habana. Desde entonces, el mandatario venezolano siempre estuvo de acuerdo con las concesiones (en particular con la desmilitarización de una zona colombiana) y gestos de apaciguamiento otorgados al grupo subversivo por su homólogo colombiano, y en más de una oportunidad le manifestó su deseo y disposición de convertirse en facilitador de la negociación con las FARC.

Sin embargo, pronto surgieron desavenencias entre los presidentes Pastrana y Chávez. El Plan Colombia, estrategia de lucha contra la narcoguerrilla puesta en marcha por el gobierno colombiano desde septiembre de 2000, que preveía una inversión total de 7.500 millones de dólares aportados por EEUU, fue el principal tema de discordia pero no el único. También surgieron enfrentamientos –aunque esporádicos– a causa de las restricciones para la entrada a Venezuela de algunos productos colombianos, con el objetivo de proteger la industria nacional.

Tras los sucesos de abril de 2002, que mantuvieron a Chávez fuera del poder por unos días, el gobierno bolivariano emprendió un giro diplomático notorio –caracterizado por una actitud más moderada y apaciguadora– hacia Colombia y otros países con los cuales había mantenido fuertes enfrentamientos. El propósito de ese cambio estratégico fue lograr apoyo internacional y buscar oxígeno político y económico para neutralizar el acelerado proceso de debilitamiento del gobierno chavista tras el golpe de Estado, a pesar del retorno de Chávez al poder. De allí que cuando se inauguró la primera presidencia de Uribe, en septiembre de 2002, las relaciones colombo-venezolanas se encontraban reencauzadas y en buenos términos.

2000-2007: consolidación del péndulo bilateral

No obstante, como en tiempos del conservador Pastrana, pronto sobrevinieron los choques político-diplomáticos entre los dos gobiernos, ahora con más fuerza, ya que el nuevo presidente de Colombia mostraba, respecto a su homólogo venezolano, ideas y

caminos políticos más antagónicos que su predecesor. El apoyo de Uribe a la invasión estadounidense de Irak y, en general, a la estrategia antiterrorista del presidente Bush, el incremento del Plan Colombia y sus efectos en los países vecinos, la defensa a la apertura económica y la no politización de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –de la cual Venezuela salió en 2006–, así como las recurrentes denuncias y manifestaciones de preocupación lanzadas desde el gobierno y la prensa colombiana por los supuestos vínculos del presidente Chávez con los grupos subversivos y sus intervenciones en los asuntos internos de Colombia, constituyeron la principal fuente de disgusto y respuesta venezolana hacia su principal vecino andino durante los siete últimos años. El mandatario venezolano siempre rechazó con contundencia y verbo agresivo los alegatos vecinos, y atribuyó a una conspiración de la oligarquía colombiana la cada vez más evidente, permanente y activa presencia de guerrilleros colombianos en territorio venezolano. Para Chávez sólo se trataba de interesados rumores que forman parte de una orquestación internacional dirigida a crear una falsa impresión de lo que ocurre en el país, de una conspiración planificada por el imperio estadounidense –en la cual se inserta la elite colombiana– contra el gobierno legítimo de Venezuela.

Pese a los numerosos y fuertes *impasses* diplomáticos, durante esos siete años no sólo se mantuvo la relación entre los dos países, incluso con largos períodos de buen entendimiento político, sino también se incrementó sustancialmente el comercio binacional, alcanzando a finales de 2007 los 6.000 millones de dólares anuales. Esto fue posible por el grado de integración e interdependencia mutua –especialmente en términos económicos– entre colombianos y venezolanos, quienes comparten una de las fronteras más extensas y vivas del continente. Pero este entendimiento pragmático tuvo mucho que ver con la política uribista de evitar –en la medida de lo posible– las confrontaciones directas con el presidente Chávez y de propiciar oportunidades de diálogo y colaboración mutua, tanto en asuntos bilaterales como en aquellos de interés multilateral y hemisférico. Esto explica, por ejemplo, que en agosto de 2007 Uribe diera un claro voto de confianza a Chávez y aprobara que, junto a la senadora colombiana del opositor partido Polo Democrático Alternativo, Piedad Córdoba, éste fungiera como mediador entre el gobierno y las FARC para un canje humanitario de un grupo de secuestrados por presos subversivos.

Una mediación, por cierto, que resultó para el presidente Chávez un excelente balón de oxígeno para su política doméstica y exterior, ya que ese papel no sólo le colocó en una situación protagónica en momentos en que su imagen se encontraba fuertemente cuestionada por su radicalización política y la toma de medidas impopulares, como el cierre del más popular canal de televisión y la propuesta de una reforma constitucional para perpetuarse indefinidamente en el poder y legalizar su modelo socialista autoritario, sino que le permitió minimizar el impacto adverso de varios escándalos de corrupción nacional e internacional (caso de la maleta en Argentina) en el que su gobierno se vio involucrado.

También en esta oportunidad funcionó la pauta del péndulo en la relación política bilateral y a fines de 2007 la tensión entre ambos gobiernos se hizo evidente por la decisión de Uribe de retirar a Chávez del papel de mediador ante las FARC, en vista de su fracaso y por la violación del protocolo que regía la operación. Ello produjo que Chávez decidiera congelar las relaciones diplomáticas con Colombia y continuar involucrado –sin autorización colombiana– en el canje humanitario, entendiéndose directamente con los jefes de las FARC. A pesar de que el gobierno de Uribe facilitó y prestó ayuda logística

para las liberaciones de varios rehenes a principios de 2008 a instancias de Chávez, en territorio venezolano, dejó claro su malestar por la forma unilateral como actuaba su vecino.

La molestia colombiana fue aún mayor cuando Chávez lanzó públicamente la propuesta de sacar a la guerrilla colombiana de la lista de grupos terroristas y reconocerle la condición de fuerza beligerante. El gobierno colombiano rechazó la idea con firmeza, aunque mantuvo su política de no caer en las provocaciones de su vecino y se limitó a solicitarle una actitud de respeto y no injerencia en los asuntos internos de Colombia, de cesar sus agresiones verbales contra Uribe y dejar su evidente parcialización en favor de la guerrilla.

Esa nueva crisis de fin de 2007 y principios de 2008 entre Caracas y Bogotá fue realmente grave, pero todavía estaba por venir el conflicto diplomático que ha llevado las relaciones bilaterales a uno de los puntos más críticos en muchos años.

Al borde de la guerra

En el transcurso de los casi ocho años de oscilantes relaciones entre Chávez y Uribe, han sido muchas las veces que el presidente venezolano predijo o amenazó con una confrontación bélica entre los dos países, pero no fue hasta principios de marzo de 2008 cuando esa posibilidad casi se hizo realidad y no a causa del gobierno colombiano sino del venezolano que, en solidaridad con Ecuador, tomó una serie de medidas contra su vecino que pusieron a ambos, ahora sí, en una situación prebélica. En efecto, un día después de la incursión armada de fuerzas militares colombianas en territorio ecuatoriano contra un campamento de las FARC, que dejó muertos a más de 20 guerrilleros, entre los cuales estaba el comandante Raúl Reyes, número dos del directorio de las FARC, el presidente Chávez se hizo parte de esa crisis entre vecinos al cerrar su sede diplomática en Bogotá, expulsando al embajador colombiano acreditado en Caracas, ordenando la movilización de 10 batallones en la frontera occidental con Colombia y amenazando con el uso de cazabombarderos rusos. Chávez calificó la acción colombiana contra las FARC de “asesinato cobarde” y homenajeó con un minuto de silencio al líder subversivo fallecido, a quien llamó “revolucionario consecuente”.

La reacción presidencial fue duramente cuestionada dentro y fuera de Venezuela. Numerosos analistas y políticos, incluso dirigentes del partido opositor colombiano Polo Democrático, la consideraron desproporcionada. Nadie entendía por qué Chávez se involucraba de tal forma en un problema ajeno. Además, su actitud le ponía en clara evidencia respecto al lado que se ubicaba en un conflicto que afecta a los colombianos – y a toda la región andina– desde hace 50 años.

Pero de la misma forma inesperada como entró en el conflicto, el presidente venezolano salió de él y, para sorpresa de muchos, en la reunión del Grupo de Río celebrada el viernes 7 de marzo en la República Dominicana adoptó una actitud moderada, trató de conciliar a los gobiernos de Ecuador y Colombia, y echó para atrás las medidas de orden bélico adoptadas unos días antes. Posteriormente, dio por cancelado el conflicto diplomático con Colombia, llamó por teléfono al presidente Uribe y acordó con éste una próxima Cumbre bilateral para el relanzamiento de relaciones.

¿A qué se debió tan repentino cambio? Varios factores deben considerarse. Por una parte, desde el inicio Chávez se encontró en un callejón sin posibilidades de salida heroica, ya que Colombia aseguró que no movería un solo soldado a la frontera (y para una guerra se necesitan dos contrincantes). En segunda instancia, la decisión del

presidente Uribe, manifestada justo antes de la Cumbre en la República Dominicana, de sustanciar un caso contra Chávez ante la Corte Penal Internacional por “patrocinio y financiación de genocidas”, basándose en las pruebas extraídas de los computadores incautados en la operación antiguerrillera en tierras ecuatorianas. Pese a que su contenido aún se encuentra en proceso de verificación por la Interpol, según el gobierno colombiano en ellas se hallan evidencias claras que involucran al presidente Chávez con las FARC, entre ellas un aporte venezolano a las guerrilla de 300 millones de dólares y de varios cientos de rifles usados. También se asegura que quedó registrado todo el proceso de liberación de rehenes y que éste habría sido planificado y coordinado por los guerrilleros conjuntamente con Chávez y la senadora Córdova, a objeto de obtener réditos políticos.

En tercer lugar, son de considerar las recomendaciones y llamamientos a la sensatez de otros líderes latinoamericanos, como el presidente dominicano Leonel Fernández, el de Brasil Lula Da Silva y el ex mandatario cubano Fidel Castro, todos preocupados por una escalada bélica que seguramente hubiese involucrado, con consecuencias impredecibles, al principal aliado colombiano, EEUU. Finalmente, está el hecho inocultable que la posibilidad de enfrentamiento bélico con Colombia, lejos de conjugar apoyo nacional y levantar el sentimiento nacionalista y anti-colombiano –que hubiese favorecido la imagen presidencial en un momento de gran descontento popular–, estaba propiciando un fuerte rechazo en la mayoría de los venezolanos, muchos de los cuales empezaron a manifestarse en las calles a favor de la paz. Según una reciente encuesta de la empresa venezolana *Varianzas Opinión*, el 89% de los venezolanos no apoyaría una guerra con Colombia.

Otros estudios de opinión recientes señalan que tras la crisis colombo-venezolana la popularidad del presidente Chávez ha bajado, mientras que la de Uribe se ha elevado a más del 80%. Además, según fuentes militares, dentro de las fuerzas armadas venezolanas prosperaba el descontento por la decisión presidencial; muchos oficiales no entendían por qué debían ir a una conflagración con la hermana República de Colombia y, peor aún, no tenían claro la definición del enemigo en este caso. ¿Cómo podían comprender que el enemigo es el gobierno legítimo de Colombia, que es el que combate el criminal negocio del secuestro, del narcotráfico, del sicariato y del terrorismo, que es todo lo que representan las FARC?

Conclusiones: Pese a haberse desactivado el estado prebélico y retornado las relaciones colombo-venezolanas al acostumbrado estado de entendimiento pragmático, es un error pensar que el conflicto de fondo entre los dos gobiernos se ha resuelto y que no existe la posibilidad de próximos *impasses* diplomáticos que pongan la relación bilateral, si no en pie de guerra, por lo menos al borde de una nueva ruptura, ya que ahora parece menos probable que la situación degeneren en un conflicto bélico. Y no sólo por el rechazo popular en Venezuela contra esa posibilidad, sino porque el principal aliado de Chávez en un eventual guerra con Colombia, la guerrilla de las FARC, se encuentra en una situación política y militarmente precaria. Se especula, incluso, que el gobierno cubano estaría intentando convencer al presidente venezolano de la necesidad de admitir que la guerrilla colombiana, como movimiento armado, está políticamente derrotada y que lo que resta de su capacidad militar podría ser destruido relativamente pronto.

En todo caso, la tensión entre los gobiernos de Colombia y Venezuela continúa, aunque más veladamente. Ello se hizo visible en la reunión de cancilleres de la OEA del pasado 18 de marzo, cuando el representante de Venezuela se colocó al lado del canciller de

Ecuador para lograr una resolución que condenara la incursión de Colombia en territorio ecuatoriano, lo cual finalmente no se logró. Los cancilleres del principal ente interamericano optaron por el “rechazo”, no por la “condena”, y acordaron, a favor de las demandas colombianas, la creación de un mecanismo de verificación que determine lo que está ocurriendo en materia de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana. El órgano de consulta, siguiendo la pauta del Grupo de Río, también asumió el compromiso de combatir las amenazas a la seguridad de todos sus miembros provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas al narcotráfico.

El resquebrajamiento del entendimiento pragmático entre Uribe y Chávez puede volver a producirse en cualquier momento. Los resultados del examen de Interpol a las computadoras pertenecientes a Raúl Reyes pueden dar lugar a un nuevo desencuentro diplomático.

Es difícil comprender el empeño de Hugo Chávez de cazar peleas diplomáticas con Colombia cuando la sensatez política en el marco de una situación de creciente aislamiento internacional y de una coyuntura nacional que le es cada vez más adversa desde el punto de vista político, económico y social, aconsejan más bien una rectificación estratégica hacia un permanente entendimiento con su principal vecino comercial suramericano.

A mi modo de ver, ese empeño se debe, esencialmente, a la particular personalidad del presidente Chávez y a su creencia –al igual que la de Fidel Castro en los años sesenta– de que una confrontación exterior puede concitarle apoyo popular, especialmente en un año de elecciones regionales. Pero se trata de una visión errada, ya que en la actualidad, como manifiestan numerosos sondeos públicos, la mayoría de los venezolanos no quiere que el gobierno continúe consumiendo su tiempo y energías en inútiles peleas externas, ni que siga gastando dinero en su política expansionista internacional. Lo que quiere la sociedad venezolana es que el gobierno propicie paz interna y externa, que se dedique a gobernar y a mejorar la situación socioeconómica nacional.

Por último, no podemos olvidar que para el proyecto de expansión bolivariana en Suramérica el principal objetivo geoestratégico es Colombia, piedra angular de una futura “Gran Colombia”. De modo que es poco probable que el presidente Chávez cese en su intento de desestabilizar su gobierno e influir en el desarrollo de su política interna.

María Teresa Romero
Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela